



TRIBUNAL
SANCIONADOR

Fecha: 12/4/2019
Hora: 8:40
Lugar: Ciudad y departamento de San
Salvador.

Referencia: 1289-18

RESOLUCIÓN FINAL

Documentos que anteceden: El día 16/11/2018, se recibió escrito firmado por la licenciada [redacted], en calidad de apoderada general judicial de [redacted], S.A. DE C.V., mediante el cual contesta la audiencia conferida en la resolución que antecede y presenta la documentación de folios 19 al 25.

Al respecto, es pertinente tener por parte a [redacted], S.A. DE C.V. por medio de su apoderada Ana Ángela Arias, y por agregada la documentación presentada.

I. INTERVINIENTES

Denunciante: Presidencia de la Defensoría del Consumidor.

Proveedora denunciada: [redacted], S.A. DE C.V.

II. HECHOS DENUNCIADOS

La Presidencia de la Defensoría del Consumidor expuso en su denuncia que en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor —LPC—, el 1/3/2018 se practicaron inspecciones en los establecimientos denominados *Súper* [redacted] y *Súper* [redacted], ambos ubicados en Tejutla, Chalatenango y propiedad de [redacted] S.A. DE C.V.

Como resultado de las diligencias realizadas se levantaron las actas correspondientes —folios 3 y 9—, en las cuales se documentó la revisión de los productos que se encontraban a disposición de los consumidores. Asimismo, en el anexo uno de las referidas actas, denominados Formulario para inspección de fechas de vencimiento —folios 4 y 10—, se detallan los productos que la proveedora tenía a disposición de los consumidores y que se encontraban vencidos.

III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA

La establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC por ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos.

IV. CONTESTACIÓN DE LA PROVEEDORA DENUNCIADA

Durante el plazo de audiencia otorgado, mediante el escrito de folios 17 y 18, la apoderada de la proveedora denunciada, en esencia, manifestó que en los establecimientos de la denunciada no tienen por costumbre vender productos vencidos y que por ello se cuenta con una bitácora semanal de revisión de productos a efecto de controlar el vencimiento y los precios según su tamaño y peso.

Asimismo, argumentó respecto hallazgos relacionados con “productos con diferencia de precio”; sin embargo, se advierte que en el presente procedimiento no se atribuye ninguna infracción relacionada con tales hechos, por lo que tal argumento no será tomado en cuenta por este Tribunal.

Finalmente, cuestionó el presente procedimiento sancionatorio simplificado, señalando que al no existir independencia entre las actuaciones de la Defensoría del Consumidor y las del Tribunal Sancionador, se vulneran principios constitucionales como el de legalidad e igualdad, ya que, a su juicio, el propósito del procedimiento es la imposición de multas.

V. SOBRE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS

Previo a realizar el análisis correspondiente, es importante referirse a lo manifestado por la denunciada, en el ejercicio de su derecho de defensa –apartado IV de la presente resolución–.

1. Respecto a la supuesta vulneración al Principio de Legalidad, cabe señalar que el mismo se encuentra regulado en el artículo 86 inciso final de la Constitución de la República, y señala que: *“los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”*. Este principio, aplicado a la Administración Pública, *implica que la Administración sólo pueda actuar cuando la ley la faculte, ya que toda acción administrativa se presenta como un poder atribuido previamente por la ley, y por ella delimitado y construido*.

La Sala de lo Constitucional en resolución final suscrita el 09/07/2012, correspondiente al proceso de inconstitucionalidad número 29-2012, al hacer referencia del inciso final del artículo citado, afirmó que las disposiciones que atribuyen competencias operan como *“prescripciones habilitantes condicionadas por la verificación de los elementos materiales precisos que la misma Constitución requiere para activar la competencia”*. Esto implica que la Administración Pública solo puede ejecutar actos con el respaldo de una previa potestad, sometida a las reglas de derechos recogidas en la Constitución y leyes; de lo contrario, su accionar conllevaría transgresiones a la ley, consecuentemente, violación al principio de legalidad.

Ahora bien, es preciso señalar que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa también proviene de nuestra Constitución, según lo descrito en su artículo 14, el cual, consigna que: *“Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso (...)”*. Sin embargo, esta potestad encuentra su límite máximo en el mandato de legalidad que recoge el inciso primero del artículo 86 de la Constitución.

En ese orden de ideas, este Tribunal está supeditado a las atribuciones, facultades y limitaciones que comprende la LPC, junto a los alcances que la misma Constitución emana, tal como lo consigna el artículo 97 de la misma ley citada: *“En todos los procedimientos administrativos que se tramiten en la Defensoría, se actuará con respeto a los derechos fundamentales y de acuerdo al régimen de garantías*

establecido en la Constitución, tratados vigentes sobre la materia y el derecho común". Por tanto, está claro que este Tribunal únicamente puede dictar actos en ejercicio de atribuciones previamente conferidas por la LPC.

De acuerdo a lo expuesto, es necesario señalar que la potestad sancionadora conferida a este Tribunal proviene de la LPC, específicamente, sobre la base de su artículo 79, en donde expresa lo siguiente: *"Para cumplimiento de su potestad sancionadora, la Defensoría contará con un Tribunal Sancionador (...)".* Esto significa que el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor tiene la facultad de intervenir punitivamente en la esfera jurídica de las personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, que al dedicarse a la producción, distribución, suministro y comercialización de bienes y servicios, han provocado lesión o daño en bienes o intereses –de orden colectivo o individual– considerados como fundamentales en la esfera jurídica del consumidor–, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones merecedora de una sanción.

Aunado a lo anterior, según el artículo 83 letra a) de la LPC, corresponde al Tribunal Sancionador instruir los procedimientos sancionatorios, y de tal competencia, se deriva la facultad de imponer sanciones si así corresponde, de conformidad al artículo 83 letra b) de la LPC; debiéndose respetar todo el marco regulatorio establecido en la LPC.

En ese orden, se aclara que, al atribuirse a la denunciada hechos que están relacionados con el posible cometimiento de una infracción a la LPC, específicamente al artículo 44 letra a) de la LPC, por ofrecer producto vencido a los consumidores, este Tribunal se encuentra habilitado para instruir el presente procedimiento sancionatorio y para resolver según corresponda conforme a derecho, por lo que, no es cierto que exista vulneración al principio de legalidad.

2. En cuanto a la supuesta vulneración al Principio de Igualdad, es conveniente señalar que la Sala de lo Constitucional, en la sentencia dictada el 29-03-2001 en el Amp. 580-98, estableció lo siguiente:

"La Constitución, acertadamente, desde su artículo 2 establece una serie de derechos consagrados a favor de la persona, es decir, reconoce un catálogo de derechos –abierto y no cerrado– como fundamentales para la existencia humana e integrantes de la esfera jurídica de las personas.

Ahora bien, para que tales derechos dejen de ser un simple reconocimiento abstracto y se reduzca a lo más esencial y seguro, esto es, se aniden en zonas concretas, es también imperioso el reconocimiento a nivel supremo de un derecho que posibilite su realización efectiva y pronta. En virtud de eso, nuestro constituyente dejó plasmado en el artículo 2, inciso primero, el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de las categorías jurídicas subjetivas instauradas en favor de todo



ciudadano, esto es, un derecho de protección en la conservación y defensa del catálogo de derechos descrito". El resaltado es nuestro.

En ese orden de ideas, en la sentencia dictada el 16-12-2011 en el Amp. 592-2009, se determinó cómo se manifiesta este derecho:

"(...) el derecho a la protección jurisdiccional (...) se manifiesta mediante cuatro grandes rubros: i) el acceso a la jurisdicción; ii) el proceso constitucionalmente configurado o debido proceso; iii) el derecho a una resolución de fondo, justificada y congruente; y iv) el derecho a la ejecución de las resoluciones.

Dichas manifestaciones, tal como se sostuvo en la sentencia de amparo 1052-2008, de fecha 16-III-2011, también son predicables –con todas sus implicaciones– del derecho a la protección no jurisdiccional (...)". Los resaltados son nuestros.

Se puntualiza, pues, que el proceso constitucionalmente configurado (debido proceso) y el derecho a una resolución de fondo, justificada y congruente, forman parte del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, por lo que argüir vulneración a aquéllos implica vulneración a éste. Respecto al principio de igualdad procesal, es importante enfatizar que el mismo se encuentra en el rubro del proceso constitucionalmente configurado, junto con –a manera de ejemplo– los derechos de audiencia y defensa, presunción de inocencia, de probar y recurrir, y los principios de legalidad, contradicción, proporcionalidad, entre otros. (Sentencia dictada el 23-02-2015 en la inconstitucionalidad con referencia 82-2011/43-2014).

Ahora bien, para el caso en concreto, se advierte que la apoderada de la denunciada alega transgresión al principio de igualdad. Por consiguiente, este Tribunal, se referirá a dicho principio dentro del marco del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional en uno de sus rubros: *el proceso constitucionalmente configurado (debido proceso)*.

La apoderada de la denunciada, en su escrito, no hace alusión de manera específica a los argumentos jurídicos en los cuales basa la supuesta violación del principio de igualdad, ni pone de manifiesto cuál es el parámetro de comparación que utiliza para afirmar que su representada ha sido puesta en situación de desigualdad, sino que menciona las implicaciones del mismo en términos genéricos, arguyendo que *por más que se trate de justificar las razones que puedan motivar una circunstancia, nunca son valoradas, ya que sólo lo que mencionan los inspectores –de la Defensoría del Consumidor– es la verdad absoluta*, afirmando que el resultado del procedimiento siempre será una multa.

De lo expuesto, este Tribunal advierte que no se ha podido establecer la supuesta vulneración del derecho de igualdad de su poderdante, pues la denunciada, al igual que la denunciante, tiene la posibilidad de aportar la prueba que estime conveniente para sustentar sus alegaciones, sin embargo, tal

como se evidencia en el presente procedimiento, la denunciada únicamente se limitó a oponerse a los hechos denunciados, sin ofrecer prueba de sus afirmaciones. Por consiguiente, se reitera, la inexistencia de vulneración al principio de igualdad.

VI. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA

El artículo 14 de la LPC establece que *se prohíbe ofrecer al público, donar o poner en circulación a cualquier otro título, toda clase de productos o bienes con posterioridad a la fecha de vencimiento o cuya masa, volumen, calidad o cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada*. De ahí que el artículo 44 de la LPC determina que *“Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes: a) Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos (...)”*.

El término «ofrecer» a que hace referencia la ley, puede entenderse como el hecho de tener una diversidad de productos dentro de un establecimiento con el ánimo de invitar al consumidor que los adquiera para su uso o consumo. Partiendo de la anterior premisa, la conducta ilícita es por consiguiente el ofrecimiento al público de cualquier clase de productos o bienes, cuya fecha de vencimiento ya ha expirado.


VII. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

1. De conformidad con los artículos 146 de la LPC y 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria conforme al artículo 167 de la LPC, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC.

Al respecto, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la LPC, el cual literalmente establece: *Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones*.

2. Constan en el expediente administrativo los siguientes medios de prueba:

a) Actas N° 476 y 477 —folios 3 y 9— de fecha 1/3/2018 y anexos uno denominado Formulario para inspección de fechas de vencimiento —folios 4 y 10—, por medio de los cuales se establece que la Defensoría del Consumidor realizó inspecciones en los establecimientos propiedad de la proveedora, así como los hallazgos consistentes en 17 productos que se encontraban entre 4 y 89 días posteriores a su fecha de vencimiento, los cuales estaban en estante, mueble y cámara refrigerante en sala de ventas. Entre los hallazgos existía producto cárnico, que, al estar vencido representa un mayor peligro para la salud de los consumidores, de acuerdo a la clasificación de los alimentos por su riesgo (Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08 Alimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, números 5.1.1, 5.2.1 y 6).



b) Impresiones de fotografías —folios 8 y 14— relacionadas con las actas N° 476 y 477 del 1/3/2018, con las cuales se establece la presentación de los productos objeto de hallazgo.

Es menester expresar que por medio de los documentos de folios 3, 4, 9 y 10 se ha dado fe de la situación en que fueron encontrados los productos; documentación que no ha sido desvirtuada por la proveedora mediante prueba idónea, no obstante haber tenido la oportunidad para hacerlo. Por ello, se infiere que los citados documentos, al mantener una conexión lógica con los hechos alegados en la denuncia, adquieren total certeza.

VIII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Aclarado lo anterior, y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado VII de la presente resolución, sobre la base de los hechos probados con los documentos agregados a folios 3, 4, 9 y 10, se concluye que la proveedora, efectivamente, tenía a disposición de los consumidores productos con posterioridad a su fecha de vencimiento —entre 4 y 89 días de vencidos—. Lo anterior configura la conducta ilícita establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC.

Finalmente, se advierte que aun cuando no haya existido dolo de parte de la proveedora en incumplir con los mandatos contenidos en la ley de la materia, este Tribunal en reiteradas ocasiones ha establecido a través de sus resoluciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 inciso 2° de la LPC, que las infracciones administrativas son sancionables aun a título de simple negligencia o descuido.

De conformidad con lo previsto en el artículo 947 del Código de Comercio —C. Com.—, la proveedora debía cumplir sus obligaciones con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio. A partir de lo manifestado por la propietaria del establecimiento, en cuanto a que son sus empleados los encargados de la rotación de productos —folio 12—, cabe precisar la responsabilidad que ésta tiene por los actos de sus dependientes conforme al artículo 378 inc. 1° del C. Com., según el que: “*El dependiente obliga al principal*”. Por su parte, el artículo 379 C. Com. establece el alcance de tal obligación, así: “*Los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que tuvieren a su cargo, en razón del puesto que ocupa frente al público*”. En consecuencia, lo alegado por la denunciada no es una eximente de responsabilidad.

De la prueba agregada al presente procedimiento se comprobó que la proveedora incurrió en la referida infracción actuando con **negligencia grave**, por la falta de esmero en verificar que en su establecimiento no existieran a disposición de los consumidores productos vencidos.

IX. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Habiéndose comprobado que la proveedora cometió la infracción establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC, es procedente la imposición de la sanción prevista en el artículo 47 de la LPC, según los parámetros establecidos en la ley en mención.

Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, debe considerarse que la proveedora es propietaria de los dos establecimientos inspeccionados, ubicados en el municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango, la cual, según las declaraciones de IVA correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2018 –folios 19 al 22–, presenta ventas mensuales superiores a \$1,500,000; y por el giro de sus negocios es imperioso que atienda las obligaciones y prohibiciones establecidas en la LPC, a fin de garantizar productos confiables y de calidad a los consumidores.

Con la conducta descrita, la proveedora de forma negligente ha incurrido en la violación de los derechos de los consumidores, específicamente ocasionando un menoscabo al derecho a la salud de los mismos, al ofrecer productos con posterioridad a la fecha de vencimiento en sus establecimientos comerciales, lo cual representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Finalmente, es menester destacar que, por la actividad económica de la denunciada, que consiste en ofrecer gran variedad de alimentos y bebidas, debía cumplir con la exigencia de poner a disposición de los consumidores productos que cumplieran con las exigencias legales, y no tener productos con entre 4 y 89 días de vencidos; considerando además, que entre los hallazgos había producto cárnico, el cual al estar vencido representa un mayor riesgo para la salud de los consumidores, de conformidad a la clasificación de los alimentos por su riesgo señalada en el Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08.

X. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14, 101 inciso 2° de la Constitución de la República; 14, 40, 44 letra a), 47, 49, 83 letra b), 144 y siguientes de la LPC, este Tribunal **RESUELVE**:

a) *Sancionar a* _____, S.A. DE C.V., con la cantidad de **NOVECIENTOS DOCE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$912.50), equivalentes a tres salarios mínimos mensuales en la industria — D. E. N° 6 del 21/12/2017, publicado en el D. O. N° 240, tomo 417 del 22/12/2017 — en concepto de multa por la comisión de la infracción regulada en el artículo 44 letra a) de la LPC, por ofrecer productos vencidos a los consumidores.**

Dicha multa debe hacerse efectiva en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, **dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de esta resolución**, debiendo comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal **certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.**

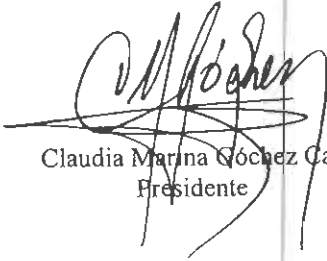
b) *Notifíquese.*

INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

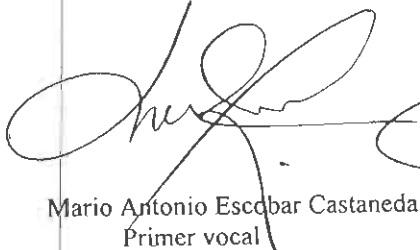
La presente resolución no admite recurso, de conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: *"Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma."*; en relación con el artículo 158 n° 5 del mismo cuerpo normativo, que dispone: *"La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)".*

PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.

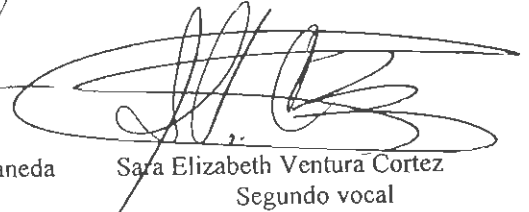
P/



Claudia Marina Gómez Castillo
Presidente



Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer vocal



Sara Elizabeth Ventura Cortez
Segundo vocal



Secretario del Tribunal